

Otoño en Berlín hacia 2017

Manuel Arias Maldonado

Babylon Berlin, la serie televisiva alemana que puede verse estos días en nuestro país, es tan solo el último ejemplo de la fascinación que ejerce sobre el público occidental la corta vida de la República de Weimar: una y otra vez asistimos subyugados al fatídico espectáculo de una descomposición sociopolítica que termina con el ascenso de Hitler al poder. De hecho, el medio televisivo había conocido ya un hito creativo abordando el mismo tema, a saber: la adaptación que Rainer Werner Fassbinder hiciera de *Berlin Alexanderplatz*, de Alfred Döblin, allá por 1980. A eso hay que sumar el éxito popular de novelas como *Una princesa en Berlín*, de Arthur R. G. Solmssen, o el más reciente de los diarios de Viktor Klemperer. Hay en Weimar sobreabundantes elementos dramáticos: la hiperinflación, las luchas callejeras entre nazis y comunistas, la llegada a Berlín de los rusos blancos que habían perdido la guerra civil, la actividad incesante de las vanguardias artísticas, el esplendor creativo del cine nacional. Que todo ello culminase en el pavoroso régimen nazi, claro, contribuye a nuestra fascinación: nos convertimos en detectives que buscan en la historia los signos que anunciaban la calamidad que estaba por venir. Buena prueba de ello son las conocidas tesis de Siegfried Kracauer y Lotte H. Eisner sobre el cine expresionista de la época, adonde podríamos acudir en busca de claves sociológicas y culturales capaces de explicar la llegada del demonio nazi. Huelga decir que se trataba, y se trata todavía, de comprender para escarmentar: para evitar que algo así pueda repetirse.

Si en algún sitio se han adoptado precauciones al respecto es, claro, en la propia Alemania. Ningún otro país ha hecho un ejercicio de memoria y reeducación democrática semejante; condigno, se dirá, a la culpa colectiva que arrastra desde que la derrota en la Segunda Guerra Mundial revelase al mundo la magnitud de los crímenes cometidos en nombre del supremacismo racial. Y es sin duda el caso, pero no está de más recordar que otros países –la Unión Soviética y China, para empezar– arrastran culpas parangonables y no han empezado siquiera a realizar gestos expiatorios. En fin, entre esas cautelas se encuentra el diseño de una democracia que pone particular empeño en defenderse de sus enemigos, así como en prevenir todo riesgo de desestabilización sistémica. De ahí la imposibilidad de que un partido obtenga representación parlamentaria en la República Federal de Alemania si no alcanza al menos el 5% de los votos a nivel nacional, la contundencia con que los jueces prohíben partidos que coqueteen con fines inconstitucionales, el complejo reparto federal del poder, la independencia de un Tribunal Constitucional que ni siquiera tiene su sede en la capital o, según comprobamos estos días, los obstáculos procedimentales que dificultan la convocatoria de elecciones anticipadas. En los últimos años, de hecho, Alemania ha sido un ejemplo de estabilidad política en la más difícil de las circunstancias, es decir, durante una crisis económica que empezó siendo crisis del euro y tuvo en el episodio griego un peligroso nadir que el gobierno de Angela Merkel hubo de gestionar haciendo equilibristas en el filo de la navaja. Sin embargo, los resultados de las elecciones del pasado septiembre anunciaban turbulencias políticas inéditas, confirmadas con la ruptura de las negociaciones de coalición entre la

CDU/CSU, los liberales del FDP y los Verdes, que aspiraban –aunque quizá no todos ellos con el mismo ahínco– a formar un gobierno *Jamaika*: negro, verde y amarillo, a partir de los colores que identifican, allí, a cada uno de estos tres partidos.

Naturalmente, la prensa ha optado por los sustantivos más dramáticos y habla del «colapso» de las negociaciones, haciendo sonar una nota de alarma sobre la posible inestabilidad de la locomotora económica y política del continente en un momento «como tantos otros» presuntamente decisivo. Pero, como ya se dijo en la noche electoral, más bien parece que Alemania está normalizándose y que su ejemplar democracia empieza a padecer males que otros ya veníamos sufriendo. Sería incluso más exacto decir que esos problemas ya existían, pues no deja de ser anómalo que los dos grandes partidos se hayan visto obligados a gobernar juntos, como ha sucedido con las *Grosse Koalitionen* que la CDU y el SPD han formado en las dos legislaturas precedentes. Y no puede descartarse que a ellas les siga una tercera, o al menos algún tipo de acuerdo de gobierno para que la CDU lidere el país desde una posición de minoría con apoyo de los socialdemócratas. Que estos últimos se muestren reacios a hacerlo es comprensible, pues no han hecho más que perder votos a cambio de contribuir a la estabilidad y prosperidad del país; el problema, como sucede en tantas otras democracias, es que no hay demasiadas alternativas.

Heribert Prantl, jefe de la sección de opinión del *Süddeutsche Zeitung*, se opone con fervor a una nueva *Groko* por el perjuicio que causaría al SPD colaborar con una Merkel «cuyo molino ya no muele», según una metáfora campesina muy del agrado bávaro. Pero admite también que un gobierno de Merkel en minoría sería perjudicial para Europa y para el propio SPD, obligado cada semana a escenificar su apoyo o rechazo al gobierno. Matthias Naß, en *Die Zeit*, sugiere que un SPD en la oposición tendría dificultades para hacerse oír al lado de Christian Lindner, Sahra Wagenknecht (la pugnaz líder de los excomunistas) y Alexander Gauland (colíder de Alternativa por Alemania). Y también él recuerda que no hay, de hecho, mejores posibilidades. Tampoco es que la coalición *Jamaika* ofreciese una promesa demasiado rutilante: el FDP de Christian Lindner se parece muy poco al FDP de Hans-Dietrich Genscher e incluso a sus equivalentes europeos, como los *Lib-Dems* británicos; lo recordaba hace un par de días Xavier Vidal-Folch, enfatizando el daño que habría hecho un liderazgo liberal tan poco europeísta como el del joven Lindner. Ahora bien, es éste quien ha conseguido sacar a su partido del arroyo al que había sido arrojado por los electores tras su experiencia de coalición en el primer gobierno de Merkel, y difícilmente aceptará participar en una coalición si eso supone poner en riesgo el recobrado vigor del partido. De hecho, algunos análisis señalan que Lindner está compitiendo con una Merkel crepuscular por el voto de la clase media y que, bajo esa premisa, una coalición con conservadores y verdes sería perjudicial para sus intereses a medio plazo. Su maniobra, en la responsable Alemania, no deja, sin embargo, de entrañar un cierto riesgo. Y seguramente pesa en el ánimo de los liberales el ejemplo de su homólogo británico, esos Liberal-Demócratas que –liderados por Nick Clegg– gobernaron en coalición con el primer ejecutivo de David Cameron y terminaron despeñados por un barranco demoscópico del que todavía no han salido. Para Los Verdes, en cambio, la perspectiva de influir sobre las políticas gubernamentales se ofrecía, o eso parece, como suficiente premio.

En cualquier caso, lo que nos interesa de esta Alemania es su significado universal.

Esto es, aquello que el panorama electoral y el fracaso de las negociaciones de coalición dice acerca del estado de la democracia liberal. La irrupción de *Alternative für Deutschland* en Berlín, por ejemplo, atestigua que Alemania no es inmune a la oleada populista que sacude las playas liberales. Ciertamente, hay politólogos que, con los números en la mano, restan importancia a esta última y piensan que las cosas no son para tanto. Pero acaso pierdan de vista la influencia del discurso populista sobre la cultura política, sobre la que esta misma semana llamaba la atención Jorge del Palacio. En ninguna parte resulta esto más claro que en Gran Bretaña, donde el Brexit se ha leído en clave populista, extendiéndose la idea de que la soberanía popular –expresada en el referéndum– no admite enmienda judicial ni parlamentaria. Nada de esto es, al menos de momento, discernible en Alemania. De hecho, el mutis de Lindner puede leerse también de otra forma. En su excelente libro sobre el populismo, Fernando Vallespín y Máriam Martínez-Bascañán sugieren que la furia anti-*establishment* tal vez deba entenderse como hartazgo del electorado ante la supeditación de la política a los imperativos sistémicos, expresados en el célebre acrónimo TINA: *There is no alternative*. Las cosas, en fin, son como son; ahí estaría para demostrarlo el fútil ejercicio de democracia directa de los griegos, que rechazaron el programa de rescate europeo para terminar aceptando uno menos favorable. Escriben Vallespín y Martínez-Bascañán:

Frente a una política cerrada sobre sí misma en nombre de imperativos sistémicos y de un orden regido por normas aparentemente invulnerables, precisamente se presentan como «racionales», las emociones [activadas por el populismo] sirven como el catalizador encargado de poner en cuestión una determinada «normalidad».

Si esto es así, ¿no está Lindner rebelándose contra la idea de que no existe otra alternativa que una coalición *Jamaika* en la que su partido habrá de aceptar políticas con las que discrepa sólo porque la aritmética parlamentaria así lo exige? ¿No está Lindner tomando elementos del libro de estilo populista para rebelarse contra la normalidad, en este caso una normalidad alemana donde el consenso merkeliano absorbe cualquier crítica en nombre de la responsabilidad del gobierno para con sus ciudadanos, y aun del país para con los europeos? Verdaderamente, ¿qué une a liberales y verdes en materia de inmigración o cambio climático? Por desgracia, nada. Se alegrará que para eso, justamente, sirve la política: para negociar las diferencias en favor de la gobernabilidad. Pero, si nos leyera, Lindner replicaría que la gobernabilidad tiene para él menos importancia que la salud de su partido. Ha optado por los principios, dice, pero, al hacerlo, evita el desgaste asociado a la labor de gobierno; los principios se convierten, así, en una herramienta táctica. Y eso también sugiere, en fin, que hay dimensiones de la política pública en las que las diferencias entre partidos son genuinas. Algo que, en un contexto de fragmentación y volatilidad, constituye un serio quebradero de cabeza.

Si bien se mira, el principal problema a que se enfrentan nuestras democracias representativas es su creciente pluralidad interna. Pero no se trata tanto de una pluralidad sociológica, que ya existía, sino de una pluralidad sociológica con reflejo parlamentario: una atomización del poder legislativo que dificulta notablemente la formación y posterior acción de los ejecutivos. Lo hemos visto en España o Bélgica; estamos viéndolo en Alemania; podremos verlo en Cataluña. Y no una vez, sino más de

una. Tras años de abjurar de las mayorías absolutas –aunque no ha habido tantas– y de demandar un mayor pluralismo parlamentario, nos encontramos con que éste no es tan fácil de gestionar en una época fuertemente dominada por los medios, en la que no se mueve una mosca sin provocar una controversia digital. Sometidos al imperativo agotador de la campaña electoral permanente y a la también permanente erosión reputacional causada por el incesante comentario mediático, los gobiernos bastante tienen con mantenerse en pie minimizando los posibles errores y acumulando capital para hacer frente a las siguientes elecciones. ¿Quién puede pensar en gobernar? «Vetocracia» es como Francis Fukuyama bautizó la práctica obstruccionista de unos partidos que, como ha sido el caso en Estados Unidos durante las últimas dos décadas, anteponen la pureza ideológica a la participación en el gobierno. Aunque no se defiende tanto la pureza como la apariencia de pureza: se trata de que sus seguidores se mantengan en una eterna inocencia, hasta el punto de que alcanzar el poder terminará por verse como una circunstancia inconveniente. Por una sencilla razón: quien gobierna, decepciona. ¡Así es la vida!

Ocurre que el mercado electoral exige de los partidos hacer mejores ofertas que la competencia; ofertas que, cabe añadir, no necesitan ser demasiado verosímiles para resultar deseables. Nadie puede ganar unas elecciones prometiendo soluciones aproximadas a problemas insolubles, y ni siquiera basta con prometer mejores futuros: se exige que sean excelentes. Algo que, dicho sea de paso, contrasta poderosamente con la lógica dominante en los medios, obligados a ofrecer malas noticias para resultar atractivos. En todo caso, paradójicamente, los partidos que compiten por el poder ofreciendo futuros relucientes corren el riesgo de perder el apoyo de sus seguidores si, alcanzado aquél, y como es inevitable, fracasan en su intento. Queda, sí, la nada desdeñable satisfacción de haber derrotado a rivales –o enemigos–, y sólo por eso merece la pena haber competido. Pero esa satisfacción corresponde sobre todo al ganador; quien se queda en el segundo o tercer puesto, ¿qué incentivo tiene para participar en la acción de gobierno?

De ahí que sea cada vez más frecuente el gobierno en minoría. Nadie quiere desgastarse acompañando en el poder al ganador, por miedo a que –como pasó en Gran Bretaña o ha venido pasando en Alemania– el socio júnior pierda lo que gana el sénior. No obstante, el partido obligado a gobernar en minoría tiene una solución a la mano: detentar formalmente el poder ejecutivo, pero gobernar lo menos posible. Sólo así evita las humillaciones y negativas de sus rivales, que están esperando, naturalmente, un paso en falso para montar un escándalo y mejorar así sus expectativas electorales. Añádase a ello que la tecnocratización de la política ha reducido el margen para diferenciarse de los demás partidos mediante la acción de gobierno, lo que obliga a estos a distinguirse en el plano simbólico y afectivo: haciendo aspavientos, practicando el tremendismo, presentando programas de máximos. Este pluralismo agresivo tiene, por supuesto, un enemigo: la realidad. El fracaso del independentismo catalán no ofrece dudas al respecto: quien se ve obligado a llevar adelante sus promesas más delirantes acaba infligiéndose un enorme daño a sí mismo.

Nada de esto, claro, sucedería sin la distorsión que introducen los medios de comunicación, que a su vez sólo pueden practicar el sensacionalismo al existir un público cuyos miembros tienden a moverse por impulsos tribales más que por decisiones racionales. Únicamente así se explica que el sordo desempeño del SPD,

partido que ha ejercido una verdadera influencia en la sociedad alemana como socio de coalición de Merkel –influencia que no podría alcanzar si se limitase a permanecer en la oposición–, sea objeto de castigo electoral. El mensaje es claro: quien colabora, pierde.

En fin, lo que sucede en Alemania –sociedad bien ordenada donde las haya– remite a esa «fatiga democrática» de la que ha hablado Mark Lilla: ya no parece bastarnos con que el sistema proporcione rendimientos socioeconómicos destacables, como sin duda sucede en el país germano, sino que necesitamos del *agón* o conflicto político para sentirnos vivos, o para sentir que algo pasa, o para evitar que no pase nada. Sospecho que las redes sociales, que han convertido la política en un entretenimiento diario para millones de ciudadanos hiperconectados y acelerados, guarda relación con el llamativo agonismo de las sociedades contemporáneas. Aunque parezca lo contrario, el héroe de esta historia no es el ambicioso Christian Lindner ni la astuta Angela Merkel, sino el admirable y grisáceo SPD. Y, aunque estamos lejos de Weimar, convendría que todos hiciéramos un esfuerzo por moderar esta tendencia obstruccionista. ¡No sea que algún día un auténtico populista gane las elecciones en alguna gran democracia occidental!